



**ALICANTE : UNA CIUDAD EN CRISIS EN UNA SOCIEDAD  
EN CRISIS. SON POSIBLES LAS ALTERNATIVAS**

---



## **DIAGNÓSTICO GENERAL**

### **ALICANTE: UNA CIUDAD EN CRISIS EN UNA SOCIEDAD EN CRISIS. SON POSIBLES LAS ALTERNATIVAS**

Dice Italo Calvino, en “Las ciudades invisibles”, que es inútil decidir si una ciudad hay que ser clasificada entre las “felices o entre las infelices”, pues “no tiene sentido dividir así las ciudades sino en otras dos clases: las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos y aquellas en las que los deseos o logran borrar la ciudad o son borrados por ellas”. Es de aplicación la idea a Alicante: no sabemos si somos felices o infelices, aunque sospechamos que, en comparación con otras, si las conociéramos, nos decantaríamos por la infelicidad. Pero ni nos atrevemos a reconocerlo ni sabemos siquiera cuáles son nuestros deseos. Arrasado el último, el de la riqueza económica vertiginosa e infinita auspiciada por la construcción de la destrucción, vemos ahora nuestro preciado horizonte como una mancha borrosa. Nuestros deseos nos han adelantado, nos han desbordado: una penetrante irrealidad nos invade. Volver a poner los pies en la tierra, en la mítica del Benacantil, en la agraciada de las playas, en la dura de la mayoría de barrios, es nuestra primera necesidad. Lo que necesitamos no son definiciones legendarias, sino espejos.

### **LA CRISIS DEL MODELO DE CIUDAD Y LA NO CIUDAD: POR UNA CIUDAD COMPRENSIBLE**

Alicante renunció hace lustros a disponer de un modelo de ciudad reconocible. Las ciudades, para ser habitables y servir a su destino de proporcionar cohesión, deben poder *leerse*, para que sus habitantes y sus visitantes las puedan interpretar. Ello es un requisito básico para un desarrollo armónico, para estar en la historia, para que puedan ser propiedad colectiva de la ciudadanía y no coto reservado a los negocios de unos pocos. Eso es lo que le falla a Alicante: instalada en un *presente continuo* ha olvidado su pasado e ignora dónde va. A Alicante se le lleva, se le arrastra por caminos desconocidos. Desde luego ello configura una especie de *modelo negativo de ciudad* pero que requiere y manifiesta la aceptación implícita de altas dosis de opacidad e irracionalidad; un modelo que no se conoce por sus intenciones ni por las decisiones, sino por sus resultados adoptados a escondidas; un modelo, por lo tanto, que disocia la forma de la ciudad y la convivencia democrática y que instala con decisión a Alicante en la peor de las incertidumbres.



Alicante ha dado pasos decididos para convertirse en un *no-lugar*, un espacio desposeído de caracteres propios que le identifiquen, un mero sitio de tránsito entre el ahora incierto y ninguna parte. Se le ha forzado, entre la indiferencia de muchos y la complicidad de otros, a despreciar su identidad y sus rentas de oportunidad, las ventajas que le aportan su ubicación geográfica, su clima, su carácter universitario, su capitalidad, su multiculturalidad latente o su potencial conectividad. Todo se ha reducido a unas pocas celebraciones de lo mismo que se despreciaba y a un *ir tirando* que la invisibilizaba aún más. La *no-ciudad*, la peor pesadilla, sustituye a la ciudad. Porque Alicante, en muchos sentidos, es la negación misma de lo que debe ser una ciudad de sus características en el siglo XX.

Este diagnóstico inicial es duro, pero es la conclusión anticipada de los diversos rostros de la crisis que debemos analizar. Y, con todo, en el diagnóstico también planeará un relativo optimismo porque, en cierto modo, una de las razones esenciales de nuestra crítica es el desaprovechamiento de las fuentes de recursos ciertos que radican en Alicante y, por lo tanto, deducimos que liberar esas posibilidades, sin caer en la nostalgia, es una apuesta por un futuro distinto, mejor.

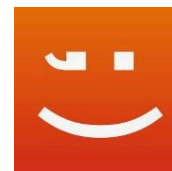


## **CRISIS ECONÓMICA: CONTRA LA EXCLUSIÓN Y LA DUALIDAD URBANA**

Las causas últimas de la *gran crisis* son globales, aunque sus efectos sean locales. Pero en Alicante nunca se tomó nota, auténticamente, de los efectos de la globalización para la ciudad ni, mucho menos, se adoptaron medidas de precaución para los riesgos que la nueva situación significaba. Sencillamente: estas cuestiones no entraron en las agendas políticas o económico-empresariales. Se renunció a maximizar algunos posibles beneficios y se condenó a la ciudad a elegir el peor escenario si el ciclo económico cambiaba. Y cambió. Dramáticamente.

Alicante apostó todo, hace lustros, a la especulación inmobiliaria, al mantenimiento –sin grandes innovaciones- del turismo y la hostelería y a un sector servicios de baja productividad con un subsector, el comercio, que se devora a sí mismo con la erección de megacentros comerciales. El puerto yace en una situación de marasmo, acogiendo usos propios de otras zonas de la ciudad y sin capacidad para definir su integración armónica con el casco urbano ni sus actuaciones prioritarias. La industria, ya escasa, ha decaído progresivamente y las expectativas no son buenas, sin que los poderes públicos hayan intervenido activamente sobre el problema. La creación de una zona logística duerme el sueño de los justos. La potencialidad de Alicante como articulador territorial y partícipe en economías de escala con su territorio limítrofe nunca se ha tomado en serio. Tampoco se ha ensayado la generación seria de sinergias con la Universidad. No disponemos de datos sobre la economía sumergida en el municipio, pero dado que los disponibles, más generales, apuntan a un 25% del PIB en el sur del País Valenciano, debe ser un fenómeno más que preocupante. El análisis podría continuar con este tono.

En general nunca se intentó que Alicante fuera una ciudad competitiva, sino que se ha venido considerando a la ciudad como un territorio para la competición interna, estrecha y cortoplacista, en torno, casi siempre, a la construcción y las grandes contratas. El sistema es perverso y ha devenido en una trama oligopólica, cuando no, de facto, en un reducto monopolístico que hipoteca el futuro mismo de la ciudad y la sofoca impidiendo que busque nuevos estímulos: no se intentarán mientras el esquema sirva para la reproducción de este capitalismo especulativo que lastra la vida ciudadana.



No es extraño que en Alicante la crisis haya tenido efectos mayores que en otros lugares y que, previsiblemente, tenga una duración mayor. Los efectos son desastrosos. En el mes de Enero de 2014 había registradas 39.156 personas como demandantes de empleo -19.837 mujeres y 19.319 hombres-. Su distribución por sectores de actividad es:

Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Sin sector de actividad
774	2.284	5.317	28.003	2.778

**(Los consignados sin sector de actividad son demandantes de empleo sin formación específica o experiencia en ningún sector)**

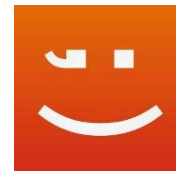
Resultan llamativas las cifras de construcción, por la dificultad de absorber tanta mano de obra en un momento de paralización de la obra pública y privada, y especialmente las del sector servicios, aunque al englobar tantos tipos de actividad –comercio, servicios a empresas, hostelería....- resulta complicado encontrar una alternativa a la colocación.

La evolución general del paro en los últimos meses, según el SERVEF, es:

### **Cuadro evolución del desempleo. Alicante 2014. Fuente SERVEF.**

#### **Demandantes de empleo en el municipio**

Mes	Mujeres	Hombres	Total
Enero	19.837	19.319	39.156
Febrero	19.843	19.184	39.027
Marzo	19.674	18.956	38.630
Abril	19.399	18.641	38.040
Mayo	19.018	18.168	37.186
Junio	18.464	17.462	35.926
Julio	18.621	17.518	36.139
Agosto	18.595	17.567	36.162
Septiembre	18.675	17.619	36.294



## **Contrataciones municipio**

*Incluye contratos indefinidos, temporales, a tiempo parcial y de formación.*

Mes	Hombres	Mujeres	Total
Enero	4.546	3.846	8.392
Febrero	3.746	3.132	6.878
Marzo	4.155	3.725	7.880
Abril	4.935	4.266	9.201
Mayo	5.944	4.712	10.656
Junio	6.760	5.242	12.002
Julio	6.754	5.803	12.557
Agosto	4.186	3.744	7.930
Septiembre	5.508	4.890	10.398

Si se examina la evolución mes a mes se detectan ligeras variaciones pero siempre con altas tasas de demandantes de empleo:

Enero de 2011:	35.013
Enero 2012:	37.970
Enero 2013:	40.545
Diciembre 2013:	38.492.
Enero 2014:	39.156.

Otra fuente de información es la Encuesta de Población Activa. El problema es que los últimos datos son del año 2011, pero resulta más fiable respecto al número de desempleados porque hace referencia a lo declarado por los/las encuestados/as, independientemente de que estén o no inscritos/as como demandantes. Según la EPA, Alicante tenía en ese año la siguiente distribución de la población respecto a la actividad laboral:

Total habitantes	Población activa	Población inactiva
328.100	178.025	150.075

A simple vista parece una tasa de dependencia muy alta para cualquier sociedad; pero si además restamos a la población activa los/las trabajadores/as en paro – 57.880 - , el grupo de población productiva de la ciudad es menor al de la población inactiva y la desempleada, 120.145 personas. Parece que estas cifras no son muy soportables, máxime cuando



una parte nada desdeñable de trabajadores lo son a tiempo parcial y los salarios han descendido en el conjunto del estado.

De los datos aportados por la EPA se puede concluir que:

- Alicante tiene una tasa de dependencia altísima.
- El número de trabajadores que ha perdido su empleo es elevado: 49.780 demandantes de empleo han trabajado con anterioridad.
- La contratación a tiempo parcial de las mujeres más que dobla a la de hombres.
- El porcentaje de paro para 2011 –última fecha de datos conocidos- es del 32,51%.

Por otra parte, resumiendo los datos del SERVEF, hallamos que el número de personas registradas en sus oficinas era de 20.054 en 2009 y que se fue incrementando hasta superar los 41.000 en 2013.

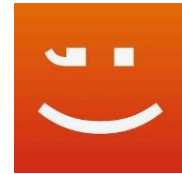
Hay otras realidades muy preocupantes, aunque difíciles de cuantificar por carecer de datos homogéneos contrastados, sobre todo porque los informes más fiables no suelen desglosarse por municipios. Así, los referentes a la pobreza –general y severa- y a los fenómenos de exclusión asociados a ella o el número de hipotecas: el 40% de las viviendas principales para las que se solicitaron en Alicante aún no han amortizado su crédito. Otro dato significativo es el estancamiento demográfico, en cuanto que contradice muchas de las presunciones sobre las que se ha levantado el imaginario de futuro de la ciudad:

**NÚMERO DE HABITANTES DE DERECHO Y PROPOCIÓN DE CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO:**

2000: 279.811 (-0'8%); 2001: 286.176 (+2'3%); 2002: 298.144 (+4'2%); 2003: 308.195 (+3'4%); 2004: 315:818 (+2'5%); 2005: 321.641 (+1'8%); 2006: 323.707 (+0'6%); 2007: 329.947 (+1'9%); 2008: 333.408 (+1'0%); 2009: 335.921 (0'8%); 2010: 335.459 (0'1%); 2011: 335.347 (0'0%); 2012: 336.128 (+0'2%); 2013: 336.828 (+0'2%)

No disponemos de un retrato definitivo de los sectores a los que está golpeando con más fuerza la crisis, pero podemos aventurar, al menos, tres aspectos dignos de consideración:

A) La fractura y atomización de las clases medias, lo que puede repercutir en comportamientos sociales y políticos inesperados: el tránsito súbito de una posición marcada por la certidumbre y por las expectativas razonables



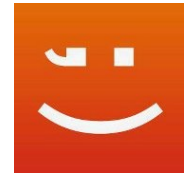
de ascenso social a la incertidumbre plena y al paro, no puede acontecer sin dejar hondas huellas en el conjunto de la comunidad; ni siquiera hablamos de una *proletarización* de estos sectores, sino de exclusión social. Entender y atender a estos sectores debe ser una tarea capital.

B) Algunos estudios apuntan a la finalización del ciclo alcista de la inmigración y, a la vez, de cambios notables en su composición interna, con descenso de la inmigración latinoamericana e incremento de la africana. Si en 2013 el número total de habitantes se eleva a 336.828, los extranjeros suponen el 15,1%, tanto comunitarios como extracomunitarios. Las variaciones interanuales son pequeñas, con un ligerísimo descenso en 2010 (0,1%) y un ligerísimo incremento en 2012 y 2013 (ambos del 0,2%). La población extranjera experimenta un pico significativo de descenso en 2010; pero desde ese año al 2013 solo ha descendido en 201 personas al compensar unas nacionalidades de origen a otras. A partir de 2010 se produce un significativo descenso de la población inmigrante de origen colombiano, ecuatoriano y argentino, que se compensa con un aumento significativo de la inmigración argelina. Todo ello puede dar lugar a un indeseable incremento potencial de tensiones xenófobas, y tanto más cuando no existen políticas activas para evitar la constitución de guetos, que se empiezan a formar a partir de la concentración de inmigrantes de un mismo origen en lugares característicos de la ciudad. La distribución de la población inmigrante en los diferentes barrios es muy desigual, concentrándose en la Zona Norte, Carolinas Bajas, Carolinas Altas, Casco Antiguo, San Antón, Raval Roig, entorno del Mercado y Campoamor, en todos los casos con porcentajes superiores a la media de la ciudad (en otras zonas el número también es elevado, pero se trata fundamentalmente de inmigración comunitaria), con picos muy altos en Colonia Requena –47,9%- o Virgen del Remedio –35,2%. Por otro lado, la incidencia demográfica del decrecimiento de inmigrantes será notoria a medio y largo plazo por la contracción de los reagrupamientos familiares, sin contar la falta de estímulos a la procreación que impone la crisis económica.

**Al respecto es de interés la distribución de las personas inmigrantes por sexos (datos 2013):**

	<b>Hombres</b>	<b>%</b>	<b>Mujeres</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>% total</b>
<b>Españoles/as</b>	137.521	48,1%	148.360	51,9%	285.881	91,5%
<b>Extranjeros/as</b>	26.428	51,9%	24.519	48,1%	50.947	16,3%
<b>Totales</b>	163.949	52,5%	148.360	47,5%	312.309	107,9%

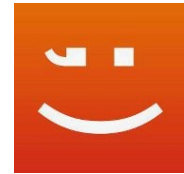




C) Hay otras realidades muy preocupantes, aunque difíciles de cuantificar, por carecer de datos homogéneos contrastados porque los informes más fiables carecen de desglose por municipios y porque los datos de los que dispone la propia administración local no están a disposición de la ciudadanía. Pero, aun cuando quienes ostenta la responsabilidad sobre las políticas públicas destinadas a la reducción de las desigualdades sociales y a asegurar que las necesidades básicas del conjunto de la población estén cubiertas, oculten o maquillen el incremento de las situaciones de exclusión social y de pobreza severa, éstas son patentes en la ciudad, apuntándose, además, a una feminización de la pobreza. La crisis económica y las políticas de recortes sociales han venido a profundizar y extender una desigualdad preexistente. A las bolsas de pobreza y exclusión permanentes, debemos añadir ahora las generadas por la nueva situación. La eliminación de los grandes o pequeños núcleos de chabolismo que se extendían por casi toda la ciudad, mejoró las condiciones de vida de buena parte de sus ocupantes, pero también volvió más invisible un fenómeno que sigue persistiendo: el de la vivienda precaria. Concentrada en algunos núcleos urbanos – el Barrio del cementerio en la parte derecha del Vial de los Cipreses, algunos bloques de viviendas de Colonia Requena, parte de Nou Alacant, parte de Ciudad de Asís, parte del Barrio de José Antonio... - o en viviendas diseminadas por otros barrios – Carolinas Bajas, San Antón, etc. -, la infravivienda, tanto de propiedad privada como pública, sigue siendo una realidad nacida en ocasiones de la mala construcción, incrementada por la ausencia de mantenimiento y la nula adjudicación de vivienda pública de la Generalitat y agudizada por los desahucios: la total desatención de las entidades bancarias sobre los pisos apropiados y la urgente necesidad de muchas familias de encontrar un espacio donde vivir, han dado como resultado un notable incremento de la precariedad en la ocupación, con las consecuencias esperadas de imposibilidad de altas en los suministros básicos, enganches irregulares, malas condiciones de habitabilidad en general, inestabilidad para sus ocupantes, etc.

Desde otro punto de vista, reiterando que no disponemos de datos concretos, algunas informaciones hacen saltar las alarmas:

-Muchos centros escolares, de primaria y de secundaria, han denunciado públicamente las condiciones en que llegan a clase algunos de sus alumnos/as, sin desayunar y el problema de la falta de cobertura de las necesidades reales de los comedores escolares.



-En los últimos años se ha incrementado notablemente la demanda de atención en los Servicios Sociales municipales y, lo que probablemente sea más grave, se ha modificado la tipología de la demanda, suponiendo la petición de ayudas para cubrir la alimentación más del 90% de las demandas planteadas por los/las usuarios/as. Si bien en los primeros años de la crisis se recibían más peticiones para el apoyo en el pago de la vivienda, la alimentación ha pasado a ser la necesidad prioritaria.

-A la vez que se producía un descenso en las partidas presupuestarias municipales destinadas a prestaciones económicas procedentes del Plan Concertado, pasando de 703.186€ en 2010 a 650.000€ en 2014. El Ayuntamiento se ha visto obligado a incrementar el presupuesto propio para ayudas de emergencia social desde los 750.000€ destinados en 2010 al 1.000.000€ consignado para 2014. Varias son las lecturas que se pueden hacer de este hecho. La primera, sin duda, una crítica feroz a la política del Gobierno central materializada en los consignado en los Presupuestos Generales del Estado para las prestaciones públicas subsidiarias, la segunda, sin minusvalorar el esfuerzo municipal, que queda patente el incremento de las necesidades no cubiertas por los/las vecinos/as y que requieren de aportación económica municipal.

-Aun así, la falta de recursos propios para cubrir la alimentación de individuos y familias de la ciudad, ha hecho que muchas entidades ciudadanas que nunca contaron entre sus objetivos la actuación ante este tipo de situaciones se hayan convertido en repartidoras de alimentos, de tal manera que suman más de cien en la ciudad de Alicante, supliendo con este tipo de asistencia la falta de cobertura desde la administración pública a través de prestaciones públicas de derecho subjetivo y no de prestaciones de emergencia puntuales, actuando con cierta ausencia de regulación y de criterios unificados.

**En definitiva:** la ausencia de recursos propios para cubrir las necesidades más básicas y los sistemas puestos en marcha para atender a la subsistencia, generan individuos dependientes que merman su capacidad para autogestionar sus propios riesgos. La deficiente alimentación provoca problemas de salud y deteriora el desarrollo de la infancia y adolescencia. Las malas condiciones del hábitat, sin suficiente iluminación, sin espacios para estudiar limitan el aprendizaje de quienes estén en edad escolar. La insuficiencia de recursos económicos imposibilita la continuación de los estudios. Al generar esos círculos viciosos, la exclusión social no es algo



reversible en un corto espacio de tiempo y sus expresiones más graves sólo se reducirán con el cambio de ciclo económico. Combatirla, en todo caso, requiere del reconocimiento de los factores que la generan y del estudio específico e imaginativo de medidas que habrá que poner en marcha en el corto, medio y largo plazo.

Atendiendo a estos factores, en conjunto, podemos decir que la dinámica basada en precarios equilibrios sociales que la ciudad ha tenido en los últimos lustros está en declive, sin que nadie aventure el sentido de los cambios ni procure reducir sus consecuencias negativas.

Todo ello no se afecta de manera homogénea a la ciudad, que asiste a un fenómeno que, de no corregirse, lastrará gravemente su futuro por décadas: la *dualidad urbana*. En efecto, esa dualidad está generando un Alicante de ricos y uno de pobres o, al menos, uno de personas con expectativas de un vivir pasable y otros sumido en la inseguridad y la perplejidad. En ese alineamiento podemos, en buena medida, reconocer el resultado de decisiones –y de *no-decisiones*- adoptadas en los últimos años: el empeño en desbordar los límites de la ciudad consolidada en nombre de las exigencias de un desarrollismo exacerbado, regido por las reglas invisibles de un urbanismo de promotor, ha provocado que Alicante sea una ciudad muy cara, difícil de sostener económica, energética y medioambientalmente, con una desigualdad injusta en las inversiones. Una vez establecida la tendencia es muy difícil corregirla: no se trata de penalizar ahora a nadie por vivir en una zona u otra, pero sí de evitar que la ciudad siga castigando a los que se quedan atrapados en determinados lugares. Abordar esta cuestión, relacionada con la de un mayor intervencionismo público en la economía en un sentido igualitario, quizá sea lo prioritario del cambio en el Ayuntamiento.



## **CRISIS DE LAS ÉLITES LOCALES, CRISIS DE DECENCIA: POR NUEVAS ALIZANZAS SOCIALES**

Las élites locales renunciaron hace tiempo a tener un papel dinámico en la configuración de la ciudad. En el plano económico trataron de incorporarse a la minoría monopolística o, al menos, de gozar de sus migajas. Para ello, la parte principal del empresariado con capacidad real de incidir en la forma urbana o/y de presionar a la estructura política, fue servil con el poder político, incapaz de organizarse de manera adecuada e independiente y poco proclive a la innovación en su mentalidad tanto como en el uso de nuevas tecnologías. Confiados en que la CAM sería el pozo sin fondo que mantuviera viva la inversión para la reproducción de sus negocios, no advirtieron que la CAM era su propio reflejo. Por eso, también, la CAM y su destino es la misma metáfora de que ha sucedido. Las élites empresariales locales, culturalmente provincianas, se han ido progresivamente convirtiendo en celosos centinelas de sus cuotas de miseria.

La élite política, el PP en solitario tras lustros de gobierno, dada la subalternidad absoluta del PSOE y su incapacidad para ser un actor activo en la vida ciudadana, no ha intentado corregir ese estado de cosas. Al revés, dejándose llevar por un liberalismo banal, y mientras proclamaba un vacío discurso de estímulo a los *emprendedores*, ha contribuido decisivamente al éxito de esa clase de negociantes que han sido, salvo honrosas excepciones, la caricatura de un empresariado *moderno*, del siglo XXI. Unos y otros, en convergencia, han constituido una auténtica *casta extractiva* con su reflejo en forma de concesiones, planes urbanísticos, contratos y subcontratos, creación de redes clientelares, apoyo a campañas electorales, etc., con su adecuado y triste reflejo en la crisis de las arcas municipales. Es cierto, no obstante, que en los últimos meses se asiste a un cierto despertar crítico en algunos sectores empresariales, quizá empujados por movimientos similares en el conjunto del País Valenciano y por el convencimiento de que el estado de cosas no puede ya mantenerse, que la misma crisis ha volatilizado los supuestos en los que se mantenía este *capitalismo de casino*. Hay que ayudar a esos grupos empresariales a protagonizar parcelas del cambio.

Y tanto más cuando una de las consecuencias de esta deriva económica destructora de ciudadanía ha sido la generación de corruptelas de las que algún día conoceremos todas las cifras que han contribuido a que la crisis sea aquí más profunda. La imputación de dos alcaldes sucesivos, de un



presidente de Diputación, de varios concejales, del principal empresario de la ciudad –en términos cuantitativos generales y de extracción de recursos públicos-, de los principales directivos de la CAM y de un elevado número de técnicos, empresarios menores y profesionales diversos, en los sumarios de algunos de los principales casos de corrupción, es un indicador terrible de la degradación a la que ha llegado la ciudad, a la dilución, entre la élite político-empresarial, de cualquier sentido de la decencia.

Con independencia de las resoluciones judiciales finales, la lectura de escuchas policiales o de diversos informes demuestra la existencia de planes para el saqueo integral de la ciudad. Esa dinámica, para detenerse, ha precisado de la concurrencia de la crisis –con la finalización de buena parte de la expectativa de negocios- y de la intervención judicial y policial, así como de un mayor dinamismo de la oposición en el País Valenciano y de cierta presión de colectivos cívicos. Pese a todo seguimos asistiendo a intentos de perseverar en las rutas conocidas –la opacidad en torno a los terrenos de Rabassa y los megacentros anejos a Ikea-. En todo caso hay que adoptar las medidas adecuadas para que, tras la crisis, no vuelva a ser posible la generalización de la indecencia, tan insolidaria, tan cruel vista desde la pobreza actual.

Una variable *blanda* de la generalización de la corrupción es la teoría de que las posibilidades económicas de una ciudad como Alicante exige, a empresarios y políticos gobernantes, circular y actuar en las proximidades de la *línea roja* que limita los comportamientos legales de los ilegales. Hay que desactivar este argumento implícito en muchas opiniones y actuaciones. Primero porque es falso, y segundo porque ese terreno fronterizo significa, en el mejor de los casos, la fractura de una ética colectiva compartida, abonando el terreno a la desigualdad y anestesiando a la ciudadanía para la corrupción con mayúsculas.

Por lo tanto es innegociable generar instrumentos que impidan amistades peligrosas, que desactiven las derivas corruptas y que dibujen un nuevo mapa para la decencia. Sin duda, actuaciones destinadas a mostrar a la ciudadanía que es posible la transparencia, la participación y una positiva austeridad en los comportamientos de los políticos debe ser el primer paso. Otro es la búsqueda de mecanismos legales para aislar a los empresarios que muestren comportamientos indeseables en sus relaciones con la ciudad. Pero lo fundamental es articular, desde el liderazgo político democrático, una *nueva alianza para el cambio* que sustituya a la actual trama dominante. Una alianza que incluya a políticos respetados, empresarios fuera de sospecha,



sindicatos y otras organizaciones sociales, la UA, Colegios Profesionales y movimientos cívicos, sociales y vecinales críticos. Todo ello debe plasmarse en un estilo de gobierno tanto como en nuevos instrumentos de participación ciudadana que destierren otro epifenómeno de la deshonestidad capilar como es el clientelismo.

## **CRISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y DEL ESPACIO PÚBLICO: IMAGINAR UNA NUEVA CIUDAD PARA TODOS**

Causa y consecuencia de la crisis global de ciudad es la ausencia de un planeamiento urbanístico que aporte rigor técnico, imaginación colectiva y seguridad jurídica. El olvido del PGOU vigente, las aventuras judiciales y la impericia en muchos aspectos del PGOU presentado a la Generalitat, así como las modificaciones parciales innumerables, generan un panorama desolador. Pero *esa improvisación no es casual: es funcional al saqueo de la ciudad*. En una ciudad troceada, sin referentes globales, sin hitos a los que amarrar la convivencia, es mucho más sencillo que los promotores puedan maximizar sus beneficios y que la dualidad se reproduzca como condición misma del negocio inmobiliario. La ausencia de planificación sensata también incide en otras perversiones como los problemas de tráfico, la ausencia de bordes claros para el conjunto urbano, el declive de partes sensibles de la ciudad consolidada o la ausencia de un diálogo racional con el mar o con el entorno metropolitano.

El referente ideológico-cultural que ha servido para justificar esta deriva ha sido el *desarrollo infinito* en nombre de las presuntas leyes de un irracional *progreso*, entendido siempre de manera economicista y neoliberal. Un progreso que, paradójicamente, encerraba en una jaula a la ciudadanía, condenada a la banalización de sus relaciones sociales en un horizonte marcado por la trivialización de las construcciones y del espacio público. Es ésta una cuestión capital: la degradación del espacio público, su sometimiento a la improvisación, la mala calidad de sus diseños, la ausencia de participación de los ciudadanos-usuarios en su trazado y funciones, su conversión en meros escenarios del negocio acelerado, ha servido, y sirve, para alejar a las personas del disfrute de lo urbano y para disciplinar demandas potenciales, recluidas en el fraccionamiento en zonas que, aparentemente, no tienen nada que ver entre sí. No es extraño que la ciudad carezca de aliento –y sus gobernantes de interés- para exigir usos claros, públicos y alternativos de espacios esenciales como la cicatriz dejada por el soterramiento de las vías del AVE, las lagunas de Rabassa, la fachada litoral o la zona de la Condomina. Igualmente, las alegrías de ese desarrollismo han





conducido a ignorar, en decisiones claves, medidas de precaución y de seguridad ante potenciales desastres naturales o ante los efectos del cambio climático.

Es especialmente relevante el dato del número y tipología de las viviendas. Con datos de la EPA para 2011 Alicante contaba con 186.515 viviendas de las cuales:

-1.130 en estado ruinoso: referido a edificios habitados agrupa los que estén apuntalados, se esté tramitando o exista declaración oficial de ruina.

-2.040 en mal estado: agrupa a las que estén en edificios con grietas acusadas o abombamientos en alguna de las fachadas, hundimientos o falta de horizontalidad en techos o suelos o en los que haya cedido la sustentación del edificio.

-14.774 deficientes: en las que se incluyen aquellas que presentan roturas en bajantes, humedades, filtraciones....

-20.845 son de construcción anterior a 1960. La evolución posterior ha sido: 1961-1970, 44.535 viviendas; 1971-1980, 46.790 viviendas; 2002- 2011, 46.825 viviendas.

Otros estudios indican que hay sólo 16.000 viviendas en alquiler, que 25.000 viviendas están vacías y que 29.000 son de segunda residencia. Todo ello apunta a unos desequilibrios difícilmente tolerables.

La política de Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante se limita a hacer inspecciones y decretar la obligación de rehabilitación por parte de los propietarios, con apercibimiento de sanción económica; pero no hay ninguna actuación específica de promoción de la conservación de los edificios, de apoyo a los/las vecinos/as con dificultades para afrontar dicha conservación en situaciones difíciles, etc. El resultado de esta política es conocido: declaración de ruina y desalojo sin que existan alternativas suficientes para el realojo de los habitantes. El conocimiento municipal sobre los edificios defectuosos solo conduce a una constante crónica de una muerte anunciada. En el mismo sentido, Alicante es una de las ciudades que todavía no cuenta con una normativa específica para la obligatoria Inspección Técnica de Edificaciones (deben realizarla las construcciones de más de 50 años de antigüedad), aunque la ley valenciana que determina la obligatoriedad de las ITE es de 2005. No ocurre lo mismo con Finestrat,

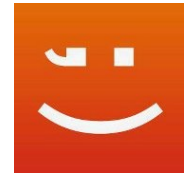


Alcoi, Xixona, Santa Pola, Catral u Orihuela, en la misma provincia, que sí disponen de dicha normativa.

Frente a este esquema hay que oponer otro: *el decrecimiento programado*, como marco en el que se pueda imaginar una ciudad más amable, más compacta, más compartida, más vivida, más solidaria, más barata en su mantenimiento económico y medioambiental, más abierta a las relaciones con su entorno metropolitano. La activación de un programa basado en esta idea requiere de mucha pedagogía política, de complicidades con sectores intelectuales y movimientos cívicos y sociales, así como planes pactados con sectores empresariales para redirigir la actividad económica hacia la rehabilitación integral, el crecimiento y mantenimiento de espacios verdes, etc. La idea no se reduce a los aspectos formales, sino que implica una concepción sistémica y política en la que la ciudad sea concebida como un todo, como una red dinámica capaz de expresar, sin dramatizar, conflictos latentes, contradicciones enriquecedoras que alimentan el diálogo urbano y que dan sentido a una razonable y democrática toma de decisiones.

Para todo ello, el primer paso debe ser la retirada del PGOU y la confección de uno nuevo, que cuente con un potente capítulo de análisis de la realidad económica de la ciudad y que configure una suerte de *Plan Estratégico general de usos legítimos de la ciudad*. En él debe figurar, como aspecto destacado, la existencia de unos *Hitos Verdes* que señalicen las fronteras de la construcción de la ciudad, así como un *Plan Integral de Directrices* para la recuperación y puesta en valor del espacio público.





## **CRISIS DE GOBERNABILIDAD: POR LA DEMOCRACIA LOCAL**

Al liderazgo factual de la *casta extractiva* formada, por activa o por pasiva, por algunos empresarios, sus satélites y algunos políticos, le sigue la ausencia real de un liderazgo político municipal. El Ayuntamiento se ha ido convirtiendo en una maquinaria destinada, esencialmente, a legitimar decisiones tomadas fuera del ámbito formal-institucional, como, por ejemplo, ponen de manifiesto las grabaciones del caso Brugal. El Ayuntamiento funciona como un renqueante aparato burocrático para la administración de temas menores, que no impide, tras la grandilocuencia de los anuncios, atisbar grados insufribles de improvisación e ineficacia. Por otra parte, decisiones de gran calado –TRAM, integración del ferrocarril, actividad portuaria, sistema antirriadas- son adoptadas por otras administraciones sin que el Ayuntamiento tenga nada, o casi nada que opinar: muchos de estos temas ni siquiera han merecido un debate en un Pleno municipal. Con la crisis, el Ayuntamiento casi nunca ha tenido un papel beligerante en defensa de los servicios públicos recortados. En materias extraordinariamente sensibles, como las relaciones con el entorno metropolitano o con la UA, el Ayuntamiento no ha mostrado interés en disponer de una hoja de ruta, de una planificación que facilite las sinergias y aporte elementos de modernización. La última muestra de renuncia a la autonomía municipal la encontramos en el regocijo con el que el PP local promueve que la definición sobre la implantación de IKEA y su séquito de viales, aparcamientos y centros comerciales, sea el producto de una Acción Territorial Estratégica aprobada por la Generalitat.

La visión del PP del Ayuntamiento no es la de una institución democrática dinámica que se preocupa e interviene sobre la realidad social para que la libertad e igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Su concepción es la de la ocupación depredadora de una máquina administrativa que se desinteresa de aquellas materias que no son fuentes de negocio inmediato para algunos elegidos o que desbordan las obligaciones estrictas, y aun en este caso, si es posible, se dilatan hasta el infinito algunas decisiones –la creación legalmente exigida del Consejo de la Ciudad, por ejemplo-.

Esta concepción encaja perfectamente con su estilo dominante de ejercicio del poder. Ese estilo se ha mantenido desde que gobierna el PP, aunque se advierten matices según quién ha ocupado la alcaldía. Con Díaz Alperi la inclinación por los empresarios adictos era más descarnada y con Castedo



floreció el populismo, de la mano de una hiperactividad que, con el tiempo, fue consumiéndose, aunque no ha sido capaz de privarse de gestos ampulosos que no ocultan su naturaleza frívola, lo que se comprueba fácilmente si se hace un repaso de realizaciones. De hecho Castedo nunca se ha atrevido a romper del todo el cordón umbilical con el modo de gestión de Díaz Alperi, limitándose a tratar de emplear el disimulo y a ampliar el catálogo de presuntas ofertas con las que mantener distraída a la ciudadanía; todo ello, de nuevo, se pone de manifiesto en las escuchas policiales. Pero uno y otra han coincidido en un aspecto clave: el ejercicio autoritario del poder, encarnado en prácticas como la ausencia de auténticos mecanismos de participación, sustituidos por festejos con redes clientelares, obstáculos a la oposición en la realización de sus funciones y, en definitiva, una actitud permanentemente despreciativa de propuestas, alternativas o ideas que no surjan de sus adictos.

Este esquema tiene grietas más que notables. La primera viene derivada de la propia crisis económica, al menos en tres sentidos:

A) La ausencia de una economía hiperdinámica priva a los aliados empresariales del PP de posibilidades de mantener viva la ilusión de generación infinita de riqueza y reduce a la mínima expresión la apariencia de gobierno de la ciudad.

B) La crisis fiscal municipal, que luego analizamos, obliga a que muchos gastos, incluidos los dedicados al mantenimiento de clientelas y los destinados a lo aparential y propagandístico, disminuyan drásticamente, reduciendo así factores básicos para la reproducción de los discursos del poder y haciendo más vulnerable al gobierno del PP a las críticas y demandas ciudadanas que no está en condiciones de satisfacer ni desviar.

C) La crisis de las clases medias es una bomba de relojería en el electorado conservador: principales víctimas de la crisis –o, al menos, víctimas con conciencia de tales- no encuentran argumentos para defender al PP –más allá del miedo mayor a un triunfo de la izquierda... que irá desapareciendo cuando más se aleje en el tiempo el recuerdo del voto anterior-.

Todo ello se ve cotidianamente agravado por la inanidad del Gobierno valenciano y del español. La propia incertidumbre en torno al futuro judicial y político de Castedo limita su capacidad de reacción y maniobra entre lo que podría considerarse sus bases naturales.



Pero no es lícito ni inteligente *esperar* que la derecha pierda: *ha de ser derrotada*, la izquierda ha de mostrar méritos propios suficientes para que la ciudadanía se identifique con una pulsión de cambio. Si esperamos a que, sin mayor interés, se refugie en la confianza de que al PP *ya le toca perder*, es posible que la mera abstención resultante no sirva para establecer un nuevo gobierno con voluntad e ideas transformadoras. Para ello necesitamos reconocer la complejidad de la realidad urbana y la transversalidad e interacción de los problemas. No podemos concebir Alicante como la suma mecánica de sus barrios o partidas rurales ni como la de diversos “sectores” de la realidad que caminan cada uno por su lado. Ese esfuerzo de comprensión dialéctica, de integración de información dispersa y de demandas fragmentadas, es el gran reto que tiene la izquierda para poder vencer. Si se consiguiera, ya sería una garantía inicial de que el cambio es posible, al basarse en una nueva mayoría social que lo desee, mayoría que tendría dos dimensiones:

- una mayoría electoral,
- una mayoría sólida y cómplice que permita alterar inercias, construir nuevos discursos y atravesar el desierto de los números rojos con alguna posibilidad de éxito.

Junto a todo esto deberemos prestar especial atención al *rigor institucional*, entendiendo por tal una revitalización de la trama corporativa de la ciudad y que incluye transparencia, lealtad con las minorías y la oposición, simplificación de los procedimientos administrativos, respeto a la democracia deliberativa en el Pleno y en las comisiones municipales, voluntad y capacidad de llegar a acuerdos estratégicos con otras instituciones, austeridad en el estilo de trabajo de los políticos, acabar con el clientelismo y definición de mecanismos que primen la eficacia y el control de la gestión. Nada de ello debe ser visto como muestras de ingenuidad: son necesidades inherentes a la consecución de auténticos objetivos de cambio, en los que no servirán movimientos propios de otras épocas ante un electorado especialmente sensible a la coherencia y a la credibilidad.

Es en ese contexto como cobra sentido el desarrollo de fórmulas plurales de participación ciudadana, en torno a la definición de estructuras estables y flexibles que abarquen todas las etapas de la gestión pública, desde la gestión de servicios y prestaciones hasta la elaboración presupuestaria, tanto en los aspectos generales de las decisiones municipales como en los que afecten a zonas o sectores específicos. Sobre todo hay que establecer con nitidez los puntos de contacto entre los dispositivos típicos de la democracia representativa y los de la democracia directa o/y participativa, con un

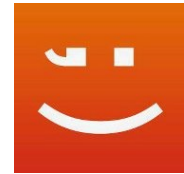


equilibrio adecuado, sin permitir la dispersión ineficaz y burocrática de debates. En definitiva, la cuestión debe ser planteada desde la óptica de cómo garantizar a la ciudadanía, en el ámbito local, el máximo ejercicio de Derechos Fundamentales; y su tratamiento, así entendido, debe ser integral y no el agregado de respuestas puntuales, oportunistas y dispersas.

Desde esta perspectiva lo programático se dirige esencialmente a esa dinámica integradora y, para ser coherentes y éticamente solventes, debe articularse en dos momentos esenciales:

A) Las propuestas iniciales: lo que hay que hacer para estabilizar la ciudad, comenzar a desarraigar sus vicios político-económicos y lanzar nuevos retos.

B) Las propuestas estratégicas que articulen la red que permita gobernar transversalmente la complejidad. Las propuestas puntuales, sin duda necesarias, sólo tendrán sentido si se integran en esos nodos.



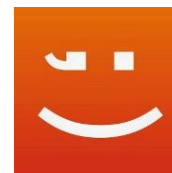
## LA CRISIS ECONÓMICA Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

De todas las facetas de la crisis de Alicante quizá sea la presupuestaria la más significativa, pues se materializa en una insuficiencia económica crónica del Ayuntamiento. En primer lugar porque nos indica mucho sobre las razones de la crisis general; en segundo porque inmoviliza al Ayuntamiento en la actualidad, al encontrarse en situación de práctica quiebra técnica e intervenido, con su margen de autonomía política sustancialmente recortado; y en tercer lugar porque hipoteca gravemente el futuro. Por todo ello no debe considerarse políticas las propuestas que no partan de analizar este hecho y que, pese a la dificultad del asunto, no ensayen modelos de interpretación y de corrección sustancial del estado de cosas.

Los datos que resumen la crisis presupuestaria son estos:

- Despreocupación política por la Hacienda Local, considerada siempre como un departamento de importancia reducida.
- Ilegalidades en la elaboración y ejecución presupuestaria según la Sindicatura de Cuentas, por: a) no incluir los créditos suficientes para atender las obligaciones con los contratos de las adjudicatarias de los servicios: limpieza, basuras, mantenimiento de la ciudad; b) incumplir los plazos de elaboración y aprobación de los presupuestos; c) realización de gastos prescindiendo del procedimiento presupuestario y de contratación.
- Alianza perversa entre la ineficacia y la opacidad, que conduce, por ejemplo, a unos presupuestos irrealistas: en algunos ejercicios la desviación final ha supuesto más de un 30% respecto de los Presupuestos aprobados.
- Contratación de proveedores en la que el precio no ocupa una posición relevante, eligiendo a los más caros, sin razón técnica que lo justifique.
- Falta de participación y transparencia; el máximo es que no se facilita al pleno municipal la información necesaria sobre los ejercicios presupuestarios y movimientos de Tesorería.

Desde otro punto de vista, el **endeudamiento** ha venido producido, fundamentalmente, por la necesidad del pago de facturas “en los cajones”, que se han ido abonando a través de endeudamiento/ préstamos a largo plazo, autorizados por diferentes normas estatales, en concreto: 2009: 26.282.333. 2011: 13.844.544. 2012: 48.008.891. 2013: 21.000.000 (euros por préstamos). Es decir, que en un período de cinco años, el Ayuntamiento ha tenido que solicitar préstamos a largo plazo por más de 109 millones de euros que habrá que devolver.



En todo caso un dato absoluto y dramáticamente relevante es el **incremento exponencial de la deuda** alcanzando su cifra más alta el año 2012 pese a encontrarnos en un periodo marcado por la crisis y una fortísima contención del gasto, como lo pone de manifiesto el siguiente cuadro:

Año	Deuda			Carga financiera pago préstamos/intereses		
	Cuantía	% sobre Presup./liquidación	habitante	Cuantía	Habitante	
2010	148.156.833	57	260.339.399	443 €	18.888.000	57
2011	166.818.569	64	260.339.399	498 €	18.888.000	57
2012	185.190.372	77	240.409.532	553 €	26.819.000	89
2013	151.660.000	(2)		452 €	31.029.000 (1)	94

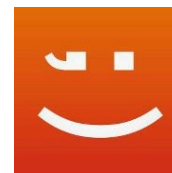
- (1) Según presupuesto  
 (2) Habrá que esperar a que se apruebe la liquidación

A la cifra de la deuda habrá que añadir: a) Los 27 millones fruto del último préstamo suscrito para pago de proveedores, firmado en 2014 pero que fue autorizado en 2013. b) Los intereses que hay que pagar, que anualmente varían según las condiciones pactadas con las entidades financieras y cuya evolución es absolutamente exponencial: 2010: 2.376.861 €, 2011: 2.879.545 €, 2012: 6.254.112 €, 2013: 6.331.670 € (según presupuesto). c) El impacto de la clarificación de los 52 millones de “ingresos de dudoso cobro”.

Una conclusión obvia de este complejo estado de cosas es que una primera responsabilidad de un nuevo gobierno municipal, será la clarificación de la deuda total. Pero es evidente que el incremento conocido lastra fuertemente la posibilidad de atender necesidades sociales y se convierte en un factor determinante para ejecutar políticas basadas en principios de solidaridad.

En cuanto a los **ingresos**, podemos comenzar con el siguiente cuadro:

Tipo de ingresos	Comparativo por habitante 2012		
	Alicante	Provincia	Otros Ayuntamientos
Ingresos Totales	8.913 /893	1.263	1.023
Impuestos directos (IBI-IAE)	362	426	399
Tasas y otros	120	164	164
Transf corrientes (Part.Estado)	183	351	200
Transf. Capital (Estado C.E)	6,5	15	15
Pasivos financieros (préstamos)	143	211	209



Apreciamos el déficit de ingresos en términos comparativos con otras ciudades de más de 100.000 habitantes y Ayuntamientos de la provincia, lo que nos dice bastante sobre la falta de previsión del PP gobernante y de la opción por mantener unos tributos bajos a costa de un deterioro urbano que, necesariamente, repercute en la falta de equidad en los servicios y en la calidad del espacio público.

En cuanto al tipo de **gasto**, un cuadro sintético ofrece los siguientes datos que se refieren al nivel de ingresos totales por habitante por todos los conceptos incluidos (los que singularmente se recogen en el cuadro y otros que no se detallan de menor importancia):

Tipo de gasto	Comparativo por habitante 2012		
	Alicante	Provincia	Otros Ayuntamientos
Gastos de Personal	245	331	293
Gastos de bienes y servicios	377	360	337
Gastos financieros (intereses)	17	35	22
Inversiones	28	85	47
Pasivos financieros (capital/préstamos)	73	91	74

**Destaca en este gráfico:**

-El relativo bajo gasto en personal, en términos comparativos con otras realidades municipales y, en cambio, el elevado gasto en bienes y servicios que, en lo principal, hace referencia a las grandes contrataciones, que, no casualmente, han sido una de las formas predilectas para el traslado de fondos públicos a manos privadas. La carga de deuda que se paga por habitante en el año 2012 indica que Alicante no está “tan mal” en comparación con otros Ayuntamientos de la provincia. Por tanto, el problema de la deuda se convierte en importante porque se dispone de menos ingresos que otros Ayuntamientos.

A la vista de esta batería de datos, y con independencia de lo ya apuntado en su análisis, enunciar un recetario sencillo para superar el estado actual no es posible en sentido estricto, ya que existen variables ajenas a la vida municipal que merecen ser tenidas en cuenta. Entre ellas la principal es la propia evolución de la crisis económica, tanto en sus rasgos macroeconómicos que pueden incidir, por ejemplo, en el precio del dinero, como en los microeconómicos y su repercusión en las condiciones de vida de la población e, incluso, ligado a esto, la percepción que de las alteraciones en la situación hagan los ciudadanos y ciudadanas. En todo





caso cabe apuntar la necesidad de un cambio de rumbo en el control y participación que debería basarse varios principios generales:

**-Polítizar la gestión de la Hacienda local**, otorgándole mayor protagonismo.

**-Transparencia:** con la publicación *on-line* y el acceso en formato digital a los datos de gestión y liquidación presupuestaria, así como a los contratos que justifican el movimiento de cargos y abonos presupuestarios. Esta información, así como las memorias justificativas y datos de balance indicados en el párrafo anterior deberían ser de acceso gratuito y fácil para todas las personas.

**-Operatividad:** con presentación de la previsión presupuestaria y del balance patrimonial con criterios de clasificación no sólo contable, sino de objetivos de las políticas de ingresos y gastos y de su evolución temporal y espacial que permita realizar un diagnóstico crítico sobre su sostenibilidad financiera e impacto ambiental y social. A todo ello debe seguir un control riguroso de las ejecuciones presupuestarias.

**-Participación:** con la presentación pública de la propuesta de Presupuestos que prepara la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento con tiempo suficiente para su debate y presentación de alternativas a las organizaciones ciudadanas del municipio, antes de que el documento pase al pleno de la corporación municipal.

**-Equidad:** revisando y corrigiendo los indicadores fiscales, así como el posicionamiento de la carga fiscal –atendiendo a criterios comparativos con otros municipios y conceptos tributarios- y completando la igualación conseguida con acciones para perseguir el fraude y eliminar disfunciones como el desfase catastral.

**-Generación de más ingresos** mediante un posicionamiento institucional más adecuado y exigente ante otras administraciones y órganos políticos. En este sentido hay que reivindicar una *deuda histórica* para con Alicante por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma, aunque sea difícil fijar su cuantía; pero para que esto sea real se requerirán tres circunstancias concurrentes:

a) La voluntad política de la mayoría municipal para acudir a esas instancias en reivindicación de fondos; b) La complicidad de la sociedad civil alicantina y de sus distintas expresiones organizadas en esa reivindicación;





c) definir con claridad el objetivo de las inversiones reivindicadas que, antes que dedicarse a las manidas infraestructuras, deberían orientarse a las que aporten calidad de vida, renovación del parque de viviendas, introducción de mejoras ambientales en edificaciones, en especial en lo referente a energías renovables, así como a equipamientos y servicios públicos. d) la necesidad de dilatar el pago de la deuda mediante la renegociación de las condiciones con las entidades financieras para no ahogar a la ciudad y que pueda generar nuevas inversiones y actividades.

Por otra parte, según hemos apuntado en otro lugar, el estado de las finanzas municipales impide caer en la demagogia populista –aunque sea populismo de izquierdas- de convertir las promesas electorales en una interminable retahíla de necesidades. En cualquier caso habrá que establecer una perspectiva entre las cuestiones generales, infraestructurales, indispensables para un cambio en la gestión, aquellas que requieren de un tiempo más dilatado para su ejecución y, en fin, las que siendo importantes, no pueden valorarse como urgentes dadas las actuales circunstancias. De la misma manera convendrá que, en todos los casos en que se pueda, se indique la forma de obtener financiación finalista o de abaratar costes respecto de los modelos actuales de gestión. Y todo ello sin olvidar que, sin quedar sometidos a premisas neoliberales, el nuevo Ayuntamiento encontrará unas limitaciones legales y una situación interna –contratas, personal, etc.- que exigirán que la aproximación al equilibrio financiero sea un objetivo defendible por sí mismo.



## CRISIS DE AUTOESTIMA: CONSTRUIR LA ESPERANZA

La síntesis de todos estos aspectos es una permanente crisis de autoestima, el convencimiento colectivo de que las cosas apenas si tienen solución, el refugio pesaroso en algunos tópicos como la “mala suerte” de la ciudad con sus políticos, el *menfotisme* presuntamente genético o la socorrida alusión a un clima que permite que “pese a todo, aquí se viva muy bien”. Nada de ello es cierto, pero sagazmente utilizado por las élites y presuntos críticos que no padecen el vicio de leer o de viajar, permite un *ir tirando* que completa el cuadro de la oscura legitimación pasiva de un bochornoso estado de cosas. Estos discursos alientan, en definitiva, lo que Ramoneda ha llamado *la dictadura de la indiferencia*, dictadura insidiosa porque permite establecer baluartes de autoritarismo invisible. En Alicante la tesis alcanzaría un carácter ejemplar porque ha permitido dar carta de identidad al conformismo desde el autoengaño, justificar muchas cobardías o desviar los problemas a lo epidérmico y folklórico.

Recuperar la autoestima colectiva, pues, es una tarea política de primer orden. Y la otra cara de ello es construir la esperanza. Porque la esperanza no es una actitud personalísima sino, para los grupos, el resultado de una construcción ideológica, capaz de ser definida en sus perfiles y desarrollada con discursos y acciones pertinentes. Algunos son los requisitos para que esto sea posible.

El **primero**, como tratamos de hacer en estas páginas, es confrontar a la ciudadanía con la verdad pero incluyendo, en cada caso, propuestas sobre posibles salidas a los problemas existentes. *Ni en el optimismo acrítico ni en el pesimismo a ultranza habita el futuro*. El futuro pasa por desarrollar hábitos colectivos de autorrespeto: en muchas ocasiones los proyectos circulantes en la ciudad han naufragado porque han estado más pendientes de la presunta visión del forastero o de la rentabilidad económica inmediata que de una evaluación que parta de considerar si lo que se desea puede constituir una cultura de defensa de la propia dignidad.

El **segundo** consiste en activar la imaginación colectiva. Porque otro síntoma de la crisis de autoestima es el *déficit de imaginación*: ¿para qué conjeturar otro curso a la ciudad si, de antemano, damos en pensar que es imposible el cambio? Existe otra variante suave: la definición de las críticas en clave nostálgica, como un regreso a pedazos cordiales de una ciudad que se fue; de



una ciudad, por cierto, que nunca fue. Poner la imaginación en el centro de las hipótesis de trabajo es absolutamente necesario, comenzando por la de los movimientos cívicos, profesionales y especialistas en asuntos relacionados con el desarrollo urbano, y llevando sus elaboraciones a la ciudadanía. En este sentido será importante reexaminar los diversos Planes Estratégicos que, promovidos por diversas instituciones se elaboraron antes de la crisis, así como el informe de Deloitte. Hay que hacer una aproximación desprejuiciada a esos estudios y sintetizar y refundir las cuestiones de interés, en especial las que supongan directrices de futuro con bajo coste. Poner la imaginación en el centro de los debates es también reintroducir una atemperada y renovada *idea de progreso* en los discursos políticos, lo que quiere decir que hay que explicar un Alicante que no sea ni ahistórico ni posthistórico, sino un Alicante *en la historia*, que ni puede partir de cero ni se resigna a no tener capacidad de decidir su futuro.

**Finalmente**, la construcción de la esperanza contra la indiferencia requiere de cambiar la perspectiva en asuntos como la acción cultural, la gestión de las señas de identidad compartidas, la concepción sobre el papel de Alicante en el País Valenciano, el desarrollo de políticas públicas de la memoria o la apreciación del paisaje y del patrimonio histórico como una cuestión moral, de autorrespeto y de legado a las generaciones futuras.

Pero, sobre todo, construir la esperanza contra la indiferencia supone reivindicar, con palabras y con acciones, la política como mandato de la razón práctica, como apelación a la victoria de lo colectivo frente al egoísmo individualista, como devolución a la ciudadanía de su poder.